

Obama retrasa el reloj de Guantánamo

BAHER AZMY (*)

Las NUEVAS normas emanadas del Departamento de Justicia de Obama amenazan con devolver (la cárcel en el territorio ilegalmente ocupado de) la Bahía de Guantánamo al agujero negro legal en el que estaba desde los primeros días del gobierno de George W. Bush. Las normas, que empezaron a manifestarse en mayo, se revisarán en una vista que se celebrará ante un juez federal de Washington. Como consecuencia de su contenido, se restringe el acceso de los abogados a los detenidos que han perdido sus peticiones iniciales de *habeas corpus*. El efecto que tendrá será arrebatar a los tribunales el control del acceso de los abogados a sus clientes, dotando al ejército de unos poderes discrecionales casi completos para dictar si los abogados pueden, y cuándo, visitar a los detenidos, cuántos abogados pueden trabajar en un caso, qué tipo de información pueden obtener y utilizar para representar a sus clientes y dónde y de qué manera esa información podrá utilizarse.

Es decir, que en vez de cerrar el campo de prisioneros como prometió, el presidente Obama ha devuelto Guantánamo al hermético y desesperado campo de internamiento que tanto vilipendió cuando era candidato.

Desde que la prisión de Guantánamo abrió sus puertas en el 2002, sus rasgos distintivos han sido el rechazo a la supervisión judicial y la exclusión de los abogados. La administración de George W. Bush eligió ese lugar para albergar a los "combatientes enemigos" porque las autoridades pensaron que la base militar —y el trato dado a los detenidos— quedaría lejos del escrutinio de los tribunales. Después de que el Tribunal Supremo rechazara esa estrategia en su sentencia del 2004 en el caso Rasul versus Bush, los abogados afluyeron en gran número a la base. Pronto quedó muy claro no solo que la mayoría de los detenidos había sufrido abusos y torturas, también que a la mayoría de ellos no debería haberseles detenido jamás. Desde la sentencia Rasul, han quedado libres más de 600 de los casi 800 hombres musulmanes que han pasado por Guantánamo.

En el 2008, la sentencia del tribunal en el caso Boumediene versus Bush reafirmó que los detenidos tenían derecho a una revisión judicial significativa de la base legal y factual de su



La cárcel de la ilegal base de Guantánamo podría ser el lugar donde Estados Unidos envía a los detenidos musulmanes a envejecer y morir. FOTO: REUTERS

detención. El caso Boumediene reabrió los tribunales a los detenidos, recuperándose el derecho de *habeas corpus* tras años de suspensión.

En los primeros tres años tras el fallo de Boumediene, la mayoría de los detenidos ganó sus casos en tribunales inferiores, lo que puso de relieve la debilidad de los argumentos utilizados por la administración Bush para llevar a cabo las detenciones. Pero el pasado año, la Corte de Apelaciones estadounidense para el Circuito DC ha revertido todas esas decisiones e impuesto unos estándares legales que hacen que sea prácticamente imposible ganar un caso de *habeas corpus*. Mientras tanto, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el desafío de los tribunales del Circuito D.C. respecto a la promesa contenida en el caso Boumediene —a pesar de una petición de súplica presentada este año en siete apelaciones diferentes— pone punto final a la supervisión judicial significativa de Guantánamo.

Así pues, las nuevas normas del Departamento de Justicia están devolviendo a Guantánamo al punto de partida. Este mes, en una presentación ante un tribunal, la administración Obama mostró su incorrecto razonamiento argumentando que, en ausencia de peticiones activas de *habeas corpus*, los abogados no necesitan tener garantizado el acceso a sus clientes ni a la información clasificada necesaria para poder presentar sus demandas.

Pero no hay justificación militar o legal plausible alguna para castigar de esa forma a los detenidos. Guantánamo sigue estando a miles de kilómetros de cualquier hostilidad activa. Más aún, entre las miles de visitas de abogados a clientes que se han producido a lo largo de los últimos ocho años, no ha

habido ningún informe creíble de que se haya divulgado una información reservada ni dañado la seguridad nacional.

El retroceso de la administración Obama, a causa de la evisceración de Boumediene por los tribunales del Circuito D.C. y la fallida promesa del presidente de cerrar la prisión, está devolviendo el *status quo* de Guantánamo a la era anterior a Rasul, cuando era un lugar icónico de la negación de los derechos jurídicos de seres humanos o del acceso al mundo exterior.

Esta evolución es tan poco sorprendente como peligrosa. En el 2004, el Tribunal Supremo se sintió motivado para asegurar una supervisión judicial sobre las operaciones de detención en Guantánamo a causa de las revelaciones sobre las torturas de Abu Ghraib, así como por la preocupación ante una serie de detenciones en las que no mediaban acusación ni juicio alguno. Actualmente, la mayoría de la gente cree que Obama ha puesto fin a las torturas en Guantánamo. Sin embargo, esto no significa que no sea ya necesario el control judicial. Los abusos y las torturas podrían fácilmente reaparecer si no existe la vigilancia adecuada. No obstante, el problema fundamental ha sido siempre la detención indefinida sin acusación ni juicio, que en sí misma es una forma de tortura.

La tortura fue el legado del presidente Bush. Confío en que el legado del presidente Obama no sea la legitimación de la detención indefinida sin acusación y juicio y hacer de Guantánamo el lugar donde Estados Unidos envía a los detenidos musulmanes a envejecer y morir. (Tomado de *The Washington Post*)

(*) Baher Azmy es el director jurídico del Centro por los Derechos Constitucionales de EE.UU.

Activistas alertan sobre nueva crisis mundial

HAIDER RIZVI

NUEVA YORK.—Activistas de todo el mundo se hicieron presentes esta semana en la suroriental ciudad estadounidense de Tampa, para protestar contra el desempleo y el hambre que sufren millones de personas en el planeta.

Las protestas realizadas entre el 20 y el 26 de este mes en esa ciudad del estado de la Florida fueron organizadas para llamar la atención sobre la agresiva postura del opositor Partido Republicano, que exige reducciones impositivas para los ricos y a la vez recortes a la seguridad social para los más pobres y la clase trabajadora.

"He visto a gente que no ha comido durante cinco días. Esto está ocurriendo en el país más rico del mundo", dijo a IPS el cofundador de la organización *Food Not Bombs* y organizador de las protestas de esta semana, Keith McHenry.

Más de 46 millones de estadounidenses (más de uno de cada siete) dependen de un programa de alimentos financiado por el gobierno federal. Los beneficios son en promedio de unos 143 dólares mensuales, aun cuando los precios de los alimentos siguen aumentando.

"Lo que ocurre con los pobres aquí y en el exterior es manipulación económica", dijo McHenry. "El acceso a la comida es un derecho, no un privilegio, pero nuestros líderes no lo reconocen. Es por eso que hay tantas personas en prisión, porque son pobres".

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de reclusos: más de dos millones. El gobierno de Barack Obama intenta recortar en 2 % los fondos para los planes de alimentación. Pero los republicanos quieren una reducción aún mayor para el programa, que en el 2011 contó con 78 millones de dólares.

Pero, más allá de Estados Unidos, millones en todo el mundo padecen hambre crónica. Según la ONU, casi 1 000 millones de personas en el planeta sufren inseguridad alimentaria, la vasta mayoría de ellas en el ámbito rural.

La carestía de los alimentos, el creciente desempleo y otros factores contribuyen con este escenario, que se deteriora cada vez más, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La semana pasada, la FAO indicó que los precios de los alimentos crecieron un 6 % en julio respecto al mes anterior. Los granos y el azúcar fueron los productos que impulsaron este incremento.

"Esto no es ninguna clase de exhortación mensual. Es la misma alarma global que ha sonado desde el 2008", dijo a IPS el activista Colin Roche, de Oxfam International, al comentar el informe de

la FAO. Los gobiernos debían tomar medidas urgentes, particularmente los de las economías más avanzadas en el Grupo de los 20 (G-20), señaló.

Muchos economistas y expertos independientes en desarrollo señalan que el hambre no se solucionará a menos que los políticos se tomen en serio el problema de la desigualdad económica.

"El hambre es causada por la pobreza y la desigualdad, no por la escasez" de alimentos, sostuvo el director ejecutivo del Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo, Eric Holt-Gimenez, autor principal del libro *"Food Rebellion: Crisis and the Hunger for Justice"* (*Rebelión alimentaria: La crisis y el hambre de justicia*).

Holt-Gimenez señaló que las malas cosechas en Estados Unidos significan un desastre para los pobres de todo el mundo. "No porque los pobres comen nuestro maíz. Tampoco comen nuestro ganado alimentado con maíz, ni se alimentan con combustibles con mezcla de etanol". Sin embargo, "sufren el tercer desastre alimentario mundial en cuatro años, porque el precio del maíz lleva al alza los de otros alimentos básicos, como el trigo, la soja y el arroz. Esto provocará un aumento de los precios en general", dijo.

"El salto en los precios de los alimentos básicos enviará una señal al mercado para la inversión especulativa, lo que aumentará aún más los precios de los granos. Los países con buenas cosechas, o reservas, las usarán para evitar comprar granos en el mercado global y adoptarán prohibiciones a la exportación. Pero los países con regímenes frágiles, en su análisis tendrán el desafío de mantener los precios de los alimentos debajo del umbral de las protestas populares. Enviarán los alimentos principalmente a las ciudades, y los precios más altos se verán en el campo, donde los pobres rurales no podrán comprar comida", pronosticó.

En el 2008, el alza de los precios de los alimentos desató una ola de violentas protestas en 40 países.

Roche, de Oxfam, definió el informe de la FAO como "un electrocardiograma de un paciente muy enfermo", y sugirió que Estados Unidos y la Unión Europea comiencen a desmantelar sus "locos" programas que destinan el 40 % del maíz cosechado a la producción de combustibles para autos y camiones.

"El G-20 tiene las herramientas para tratar las causas de los volátiles precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria hoy y en el futuro", aseguró. El activista llamó a los países del Norte a "revertir décadas de inversión insuficiente en la pequeña agricultura". (Fragmentos tomados de IPS)